



## CRÓNICA POLÍTICA DE RUANDA, 2015-2016\*, por Filip Reyntjens

[Traducción, Ramón Arozarena]

### 1. INTRODUCCIÓN

Aun cuando habitualmente se trata de un momento político importante, la revisión constitucional que permite que el presidente Kagame opte a tres mandatos adicionales cuando expire su segundo mandato en 2017, en realidad no es más que un detalle, ya que desde hacía varios años la suerte estaba echada. Por otra parte, la limitación del número de mandatos presidenciales está sometida a duras pruebas también en otras partes de África<sup>1</sup>. La continuidad en la gobernación política es grande. El régimen ruandés mantiene su firme control en detrimento de la oposición política, de la sociedad civil y de la prensa, pero al mismo tiempo se ve confrontado a disensiones en su seno, como lo atestiguan las purgas y los procesos por “subversión”. En el contexto de un asunto ante la Corte africana de derechos humanos y de los pueblos, muestra igualmente la poca confianza que tiene en la calidad de su justicia. En fin, la manera como se inmiscuye en los asuntos internos de Burundi, preso de una grave crisis desde abril de 2015, crea tensiones en la región.

### 2. GOBERNANZA POLÍTICA

#### 2.1. Revisión constitucional

Desde hace varios años, esta crónica ha anunciado una revisión constitucional que permitiría al presidente Kagame optar a un nuevo mandato en 2017, más allá de su segundo y último septenio autorizado por la constitución de 2003. A pesar de los desmentidos, esta revisión estaba escrita en las estrellas y la campaña, iniciada a finales de 2012, tomó el aspecto de un maremoto en 2014. Protagonizada por el FPR y todos los partidos con representación parlamentaria y ampliamente apoyada por los medios de comunicación y por los creadores de opinión, la campaña logró una aparente unanimidad, ya que 3,7 millones de electores firmaron la petición, en el marco de una expresión “espontánea” organizada por el régimen; pero las presiones para adherirse fueron muy fuertes<sup>2</sup>. Contrariamente a lo sucedido en otros países africanos, no hubo ni debates ni manifestaciones, ni

<sup>1</sup> REYNTJENS, F., « The Struggle Over Term Limits in Africa. A New Look at the Evidence », *Journal of Democracy*, vol. 27, no. 3, julio 2016, pp. 61-68.

<sup>2</sup> Phil Clark señala que las autoridades locales recurrieron al « puerta a puerta » para arrancar firmas de apoyo a la petición; algunos firmaron varias veces (CLARK, P., « Rwanda: The most serious threats to Kagame's leadership come from within his party », *The Africa Report*, 2 diciembre 2015).

siquiera pacíficas. Nada extraño ya que ninguna demostración en la vía pública no organizada por el poder se ha producido en Ruanda desde la toma del poder en 1994 por el FPR.

Las dos cámaras del parlamento aprobaron la enmienda. Con ocasión de las “consultas” nacionales, los diputados y senadores no se toparon más que con una decena de personas opuestas a la iniciativa, en una población de once millones. Las fuertes condenas emanadas desde la comunidad internacional, concretamente de los EEUU y de la UE, no hicieron que cambiara nada en el proyecto; Kagame denunció la injerencia internacional en los asuntos internos ruandeses. El 18 de diciembre de 2015, en un referéndum precedido por una campaña en sentido único<sup>3</sup>, el 98,3% de los electores aprobaron la revisión constitucional. Las experiencias pasadas en las elecciones de Ruanda generan serias dudas sobre la real voluntad del electorado<sup>4</sup>, pero la naturaleza bloqueada del espacio político hace aleatoria cualquier especulación sobre los sentimientos populares<sup>5</sup>. La constitución revisada fue publicada el 24 de diciembre en el *Journal Officiel*. Kagame, que siempre había adoptado una posición evasiva con relación a sus ambiciones, anunció el 31 de diciembre que se presentaría a la elección presidencial de 2017: “me habéis pedido que dirija este país después de 2017. Dada la importancia que vosotros acordáis a este asunto, yo no puedo más que aceptar”<sup>6</sup>.

Se cierra así el ciclo para la persona que en 1994 había afirmado “no tener deseo alguno de hacer carrera política después de la guerra”<sup>7</sup> y que en 2010 dijo que sería para él un fracaso si no encontrara a nadie para sustituirlo antes del final de su mandato: “los que buscan un tercer mandato, buscan un cuarto y luego un quinto”<sup>8</sup>, una predicción que, ahora, él mismo realiza. Se alcanzó el sumun de la hipocresía cuando en mayo de 2016, en el marco de un panel presidido por su amigo Tony Blair durante el *World Economic Forum on Africa* en Kigali, Kagame pretendió que no deseaba un tercer mandato, pero que había tenido que “plegarse” a los “ruegos” de su pueblo: “he estado tentado de decir a mi pueblo: sabed que hay sitio, ¿no podéis encontrar a otro que lo ocupe? (...) Pero seguían diciendo: ¡No!, no estamos preparados para asumir riesgos: Queremos que sigas”<sup>9</sup>. Los que conocen, aunque sea mínimamente, el funcionamiento del sistema político ruandés saben que una decisión de esta importancia no es tomada sin el aval e incluso sin la iniciativa personal de Kagame.

El artículo 101, tal y como ha quedado enmendado, mantiene la limitación a dos del número de mandatos presidenciales y reduce la duración de un mandato de siete a cinco. Nada que objetar, a primera vista. No obstante, el capítulo XI, relativo a las disposiciones transitorias, contiene el artículo 172 que implica una gran modificación. Procede en tres etapas. El primer párrafo estipula: “El Presidente de la República en ejercicio en el momento de la entrada en vigor de la presente Constitución sigue ejerciendo el mandato para el que fue elegido”. Esta disposición, en principio, no tiene nada de extraordinario, ya que trata de evitar un vacío en el ejercicio de la función presidencial, aunque habría sido más lógico prever esta continuidad para todas las funciones del Estado en una única disposición transitoria. Sin embargo, este párrafo establece la base de algo mucho más importante, concretamente el mantenimiento de Kagame en funciones después de 2017.

---

<sup>3</sup> El único partido de oposición registrado, el Democratic Green Party ecologista, fue la única voz contestataria. Apeló a la Corte Suprema para que la enmienda fuera declarada inconstitucional; pero su petición no fue admitida, justamente, al no tener base en la constitución. En los medios de comunicación, el único periodista crítico fue Bob Mugabe que estos últimos años se expresa con independencia y valentía sobre la situación política en Ruanda.

<sup>4</sup> Sobre las manipulaciones sistemáticas de los escrutinios, ver REYNTJENS, F., *Rwanda. Gouverner après le génocide*, Paris, Les Belles Lettres, 2014, pp. 45-77.

<sup>5</sup> Human Rights Watch expresa “sus inquietudes con relación al entorno en el que se desarrolló el referéndum y las enmiendas constitucionales que fueron adoptadas” (HUMAN RIGHTS WATCH, *Contribution au 4<sup>ème</sup> examen périodique du Rwanda par le Comité des droits de l’homme*, 12 febrero 2016).

<sup>6</sup> « Le président rwandais Paul Kagamé annonce sa candidature à un troisième mandat », *Le Monde.fr*, 1 enero 2016.

<sup>7</sup> « Rwanda Rebels: Army of Exiles Fights for a Home », *The New York Times*, 9 junio 1994

<sup>8</sup> « Le président rwandais ... », *op. cit.*

<sup>9</sup> « I didn’t want third term, says Rwanda’s Kagame », Reuters, 12 mayo 2016.

En efecto, la parte operativa del párrafo 2 estipula: “Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 101 de la presente Constitución (...), un mandato presidencial de siete (7) años queda establecido y tiene efecto con la expiración del mandato al que se alude en el primer párrafo del presente artículo”. Si bien la calidad “legística” de esta disposición es débil y podría suscitar dudas respecto del beneficiario de este septenio excepcional (la formulación podría aplicarse a cualquier otro candidato), el párrafo apunta claramente a Kagame y sólo a él, como lo indica la parte no operativa (ver más adelante). Así pues, el párrafo 2 permite a Kagame ser candidato a un tercer mandato de siete años en 2017.

El tercer párrafo estipula: “Las disposiciones del artículo 101 de la presente Constitución surten efecto después del mandato de siete (7) apuntado en el párrafo 2 del presente artículo”. Ello significa que, después del tercer mandato en 2014, Kagame puede ser candidato en dos quinquenios adicionales, lo cual implica que teóricamente puede permanecer en el puesto hasta 2034. Dado que de facto estaba a la cabeza del país desde 1994 antes de convertirse formalmente presidente en 2000, su presidencia podría, en consecuencia, extenderse cuarenta años.

El artículo 172 contiene al menos tres particularidades. La primera es, evidentemente, que esta enmienda constitucional está hecha a la medida de una única persona, el presidente Kagame. Normalmente, las constituciones son abstractas y generales, y esta particularidad ha sido puesta de relieve por la alta representante de la UE Federica Mogherini en una declaración hecha pública el 3 de diciembre de 2015: “La adopción de disposiciones que no pueden aplicarse más que a una única persona debilita la credibilidad del proceso de reforma constitucional (...) Las modificaciones de la Constitución ruandesa (...) tendrían tales consecuencias”<sup>10</sup>.

En segundo lugar, la aplicabilidad al solo presidente Kagame de este texto enmendado puede ser deducida de otra particularidad, por la inclusión de una disposición no operativa en el párrafo 2 del artículo 172, “teniendo en cuenta las peticiones presentadas por el Pueblo ruandés antes de la entrada en vigor de la presente Constitución revisada, basadas en los desafíos sin precedente que se derivan del pasado trágico que ha conocido Ruanda y de la vía elegida para superarlos, los progresos ya realizados y el deseo de establecer sólidos cimientos para el desarrollo sostenible”. Este párrafo no solo puede aplicarse únicamente a Kagame, sino que se trata de una formulación que uno esperaría ver en el preámbulo y no en el texto mismo de la Constitución, ya que no tiene ningún alcance normativo.

La tercera particularidad reside en que la entrada en vigor del artículo 101 depende de una eventualidad contingente; concretamente depende de que el presidente Kagame sea candidato en 2017 y sea elegido. Si bien puede suponerse que será elegido si opta por ser candidato, la cuestión sigue en pie sobre qué sucedería si, por una u otra razón, no fuera candidato. En este caso, ¿el artículo 101 entraría en vigor en 2017? Estas tres particularidades son la consecuencia de un extraño proceso constitucional enteramente orientado al mantenimiento de Kagame en el poder después de 2017. Toda la campaña llevada a cabo hacia este objetivo se ha personalizado fuertemente; el presidente ha sido presentado como único e irremplazable y, más generalmente, Ruanda ha sido presentada como un caso excepcional.

## **2.2. Desavenencias en el seno del régimen**

El consenso aparente en torno a la revisión constitucional oculta mal las divisiones en el seno del poder. En junio de 2015, Connie Bwiza, diputada del FPR desde 1999, dimite por “razones personales”, pero posteriormente nos enteramos de que las razones serían más bien políticas. Bwiza se habría opuesto a la extensión del número de mandatos presidenciales y habría criticado al régimen; pero, la causa inmediata parece haber sido el hecho de que su marido hubiera pedido asilo político en los EEUU. No obstante, la misma Bwiza reconoció más tarde haber cometido “errores” y dijo aceptar las reglas de la disciplina en el seno del partido<sup>11</sup>. Sin embargo, ya señalamos el año pasado que las “mujeres históricas”

---

<sup>10</sup> « Déclaration de la haute représentante, Mme Federica Mogherini, au nom de l'UE, sur une révision de la Constitution du Rwanda », Bruxelles, Communiqué de presse, 3 décembre 2015.

<sup>11</sup> « Connie Bwiza owns up to mistakes », *The New Times*, 16 junio 2015.

del FPR ya pagaron lo suyo en la reunión de la ejecutiva ampliada del partido en agosto de 2014<sup>12</sup>. Antes que Bwiza cayeron en desgracia concretamente Rose Kabuye, Mary Baine e Inmaculé Uwanyirigira<sup>13</sup> y después de ella Odda Gasinzigwa en marzo de 2016.

La persecución y condena de militares de alta graduación parecen ilustrar igualmente los desacuerdos. Volveremos sobre la cuestión en la sección consagrada a la justicia. Los desbarajustes en la cúpula del ejército son cada vez más frecuentes. En febrero-marzo de 2016, los mandos de la fuerza de reserva, de la guardia republicana, de los servicios de información militar (J2) y de los *National Intelligence and Security Services* (NISS) fueron sustituidos<sup>14</sup>. El antiguo responsable del J2, general Richard Rutatina, nombrado apenas tres meses antes y que en 2012 se le mantuvo en residencia vigilada, fue cesado “con efectos inmediatos” sin que se le asignara una nueva función.

Lo mismo que el año pasado, el *National Leadership Retreat* (*Umwiherero n° 13*) celebrado en marzo de 2016, ha sido la ocasión utilizada por el presidente Kagame para denunciar la mediocridad de todos. Su largo monólogo acusatorio, en el que se quejó de verse obligado a hacer cada año los mismos reproches, fue seguido con incomodidad por la audiencia que miró al suelo o fingió tomar notas. El cuchillo reabrió la herida cuando el diario del régimen explicó por qué “Kagame está enfadado”: Las autoridades públicas y los funcionarios no cumplen con lo que se espera de ellos y “la cólera de Kagame proviene de los estándares bajos que los líderes parecen haberse fijado”<sup>15</sup>. La manera como el presidente se erige en dador de lecciones a los cuadros del partido y del Estado crea fuertes resentimientos que, no obstante, en un contexto autoritario, no se expresan públicamente.

Los observadores externos ven sin embargo amenazas. *L’Africa Report* señala que « cada vez será más difícil ocultar las divisiones políticas en el seno del FPR en el poder<sup>16</sup>. En el mismo sentido, Phil Cark, que siempre ha mostrado mucha comprensión por el régimen de Kigali, estima que las amenazas más serias para la posición de Kagame provienen de su propio partido. Observa crecientes signos de desavenencias en el interior del FPR “que podrían minar los progresos hechos por Ruanda desde el genocidio”<sup>17</sup>.

### 2.3. Proteger la «verdad»

El régimen consagra medios y esfuerzos colosales para proteger su versión del pasado, del presente y del futuro. La Comisión nacional de lucha contra el genocidio (CNLG) es una de las principales puntas de lanza de esta campaña. Con ocasión de las conmemoraciones de abril de 2016, cuyo tema fue “la guerra contra los negacionistas”, su presidente Jean-Damascène Bizimana, conocido por sus posiciones radicales, afirmó desear que los que viven en el extranjero y critican al FPR fueran perseguidos judicialmente por negacionismo, en virtud de leyes que los países donde residen son invitados a promulgar. Esta petición fue repercutida a Francia<sup>18</sup> y Bélgica<sup>19</sup>, y el 12 de abril la CNLG publicó una lista de extranjeros culpables de negacionismo, de minimización del genocidio o de divulgación de la ideología del genocidio. La lista contiene 55 nombres de investigadores, periodistas, abogados, políticos, magistrados, sacerdotes y militares. Es muy heteróclita y el único lazo que parece unir a los que se encuentran en ella es que se han mostrado críticos con el FPR<sup>20</sup>. Queda confirmado que se trata de eso cuando Bizimana afirmó que “las alegaciones contra el FPR son una gruesa mentira y constituyen un

<sup>12</sup> REYNTJENS, F., « Chronique politique du Rwanda, 2014-2015 », in REYNTJENS, F., VANDEGINSTE, S., VERPOORTEN, M. (eds.), *L’Afrique des Grands Lacs. Annuaire 2014-2015*, Anvers, UPA, 2015, pp. 250-251.

<sup>13</sup> « Why is RPF trying to silence its own ‘liberation girls’ ? », *The East African*, 28 junio 2015.

<sup>14</sup> El NISS estaba dirigido por el general Karenzi Karake, del que hablaremos.

<sup>15</sup> « The President is angry », *The New Times*, 21 marzo 2016.

<sup>16</sup> « Rwanda Country Profile 2015: Political and security rifts », *The Africa Report*, 20 novembre 2015.

<sup>17</sup> CLARK, P., « Rwanda: The most serious threats... », *op. cit.*

<sup>18</sup> GISAGARA, R., « Il est temps de réprimer en France la négation du génocide commis contre les Tutsi », *ARI*, 14 abril 2016.

<sup>19</sup> Por medio del embajador de Ruanda en Bruselas: « Le Rwanda réclame une extension au génocide de la loi réprimant la négation de la Shoah », *rtbf.be*, 5 abril 2016.

<sup>20</sup> El autor de esta crónica expresa su halago por encontrarse en esta lista.

signo de ideología del genocidio<sup>21</sup>. Del mismo modo, el parlamento decidió consolidar los esfuerzos para contrarrestar el negacionismo y el revisionismo por todos los medios, incluso por medio de acciones judiciales<sup>22</sup>. A primeros de abril adoptó un plan quinquenal de combate contra la ideología genocida<sup>23</sup>. La juventud ruandesa parece no obstante poco motivada por la cuestión y el gobierno reprocha a los jóvenes que cada vez asisten en menor número a las conmemoraciones<sup>24</sup>. Ello no impide que la lucha contra la “ideología del genocidio” prosiga. Durante la semana del duelo, que se inicia el 7 de abril, fueron cuarenta los casos llevados a los tribunales. Algunos son realmente calamitosos: un hombre fue arrestado por haber utilizado una moneda “usada bajo el régimen de Kayibanda”; un responsable de célula fue llevado ante los tribunales por haber afirmado que las conmemoraciones “son una pérdida de tiempo”<sup>25</sup>. Según la CNLG, entre 2011 y 2014, han sido condenadas por ideología genocida 223 personas<sup>26</sup>.

Señalemos por fin que un hecho anecdótico pero revelador muestra bien las dificultades que hay para superar el complejo étnico, todo ello a pesar de las declaraciones oficiales en el sentido de que dicho complejo es algo del pasado. A mediados de abril de 2016, el Primer ministro Anastase Murekezi declaró que su bisabuela era tutsi, pero que se hizo hutu porque su madre era criada/sirviente en una familia hutu<sup>27</sup>. Aunque, sin duda, lo que quiere es mostrar la fluidez de las categorías étnicas de antaño, en realidad lo que reivindica es su “tutsiedad” y ello a pesar de que es Primer ministro porque es hutu

#### 2.4. Oposición interior y sociedad civil

La vida ha seguido siendo difícil para los escasos partidos de oposición y para las organizaciones independientes de derechos humanos. Las FDU-Inkingi (Fuerzas Democráticas Unificadas), no reconocidas, son las más afectadas por la represión. La presidenta Victoire Ingabire permanece en la cárcel tras haber sido condenada a 15 años en 2013. Volveremos sobre su apelación ante la Corte africana de derechos humanos y de los pueblos (CADHP) en la parte dedicada a la justicia. El secretario general del partido, Sylvain Sibomana, purga una pena de ocho años de cárcel. Otros dirigentes del partido, que sin embargo no representa una seria amenaza para el régimen, siguen siendo víctimas de persecución. Gratien Nsabayaremye, comisario para asuntos políticos, ha sido “invitado”, invitación acompañada de amenazas, a unirse al FPR en varias ocasiones desde 2012. A primeros de diciembre de 2015, el primer vicepresidente del partido fue arrestado en Kigali y detenido en un lugar desconocido; fue liberado 36 horas después tras haber sido interrogado sobre algunas declaraciones realizadas en los medios (concretamente había declarado a RFI que los debates parlamentarios relativos a la revisión constitucional habían constituido una “puesta en escena para mostrar que hubo una discusión”). El portavoz de la policía anunció que se había abierto una investigación contra Boniface Twagirimana “por haber intentado convencer a la gente para que desobedecieran los programas gubernamentales”<sup>28</sup>. A finales de marzo de 2016, la tesorera adjunta del partido fue detenida cuando iba a visitar a Ingabire. Motivo: “provocación a la rebelión y disturbios”, aparentemente porque estaba en posesión de un libro escrito por la presidenta<sup>29</sup> de su partido; libro que no obstante está a la venta, libre, en Kigali. Días más tarde, Illuminée Iragena, responsable de una ONG comprometida en temas educativos, “desapareció”, a

<sup>21</sup> «How the academia played a critical role in the promotion of genocide ideology », *The New Times*, 1<sup>er</sup> mayo 2016.

<sup>22</sup> « MPs seek to tackle genocide revisionism beyond borders », *The New Times*, 7 septiembre 2015

<sup>23</sup> « MPs outline five-year plan to fight genocide ideology », *The New Times*, 2 abril 2016.

<sup>24</sup> « Rwandan youth feel left out of events marking genocide months », *The New African*, 9 abril 2016.

<sup>25</sup> « As many as 40 cases of genocide ideology reported during the mourning week », *The New Times*, 15 abril 2016. Un responsable de sector es detenido por haber dicho que las conmemoraciones deben iniciarse el 6 en lugar del 7 de abril (« Sector leader held over genocide denial », *The New Times*, 13 abril 2016).

<sup>26</sup> « Deux cent vingt-trois personnes ont été reconnues coupables d'idéologie du génocide de 2011 à 2014 », Kigali, ARI, 20 abril 2016.

<sup>27</sup> Esta historia nos parecía tan extraña que hemos tratado activamente de dar con fuentes que podrían desmentirla. Ni responsables del régimen ni el propio Primer ministro lo han hecho. Puede uno imaginarse las ironías en muchos salones tutsi...

<sup>28</sup> « Rwanda : le n°2 du parti de l'opposante emprisonnée Ingabire arrêté puis relâché », Kigali, AFP, 5 diciembre 2015.

<sup>29</sup> INGABIRE UMUHOZA, V., *Entre les 4 murs du 1930. Notes de Mme Victoire Umuhoza Ingabire 2010-2013*, Bruxelles, Éditions Scribe, 2015.

causa, al parecer, de que su nombre era mencionado en el libro de Ingabire. Las FDU-Inkingi dicen temer que esté detenida en el campo militar de Kami, conocido como lugar de detención secreta y tortura<sup>30</sup>.

El único partido de oposición reconocido, el *Democratic Green Party* ecologista, sufre “persecución, huida y exilio, arrestos, asesinatos, como si ello formara parte de la vida política cotidiana”<sup>31</sup>. Fue el único partido que se opuso públicamente a la enmienda constitucional que permite a Kagame optar por nuevos mandatos. En la perspectiva de las elecciones de 2017 y 2018, ha pedido al Primer ministro que haga un cierto número de reformas de las leyes electorales y de los partidos políticos para, concretamente, hacer más transparentes las operaciones de voto y el recuento de votos. Al no estar representado en el parlamento, tiene pocas posibilidades de ser escuchado.

Cuando en julio de 2015, tres partidos no reconocidos (FDU-Inkingi, PDP-Imanzi, PS-Imberakuri) intentaron poner en pie una plataforma bautizada “Marco de consulta permanente (CCP), el lanzamiento fue saboteado por el régimen; estos tres partidos del interior se unieron en una plataforma más amplia, lanzada en Bruselas el 14 de agosto de 2015, a dos movimientos activos en el extranjero, el RNC y *Amahoro People Congress*. A la vista de una larga experiencia de creaciones, escisiones y desapariciones de plataformas políticas de la oposición, habrá que ver si ésta resulta más exitosa que las precedentes.

Mientras la sociedad civil independiente ha dejado de existir en los primeros años 2000, la última asociación de defensa de derechos humanos, La Liga ruandesa para la promoción y la defensa de los derechos del hombre (Liprodhor), neutralizada en 2004, ha intentado en varias ocasiones retomar sus actividades. Después de que el FPR la hubiera una vez más recuperado, la asamblea general debía elegir un nuevo consejo de administración para sustituir al que estaba bajo control del gobierno. A primeros de septiembre de 2015, la policía irrumpió en plena operación de voto, en el momento en que responsables con fama de independientes eran elegidos. Según el periódico del régimen, el escrutinio estaba amañado<sup>32</sup>. En noviembre, fue elegida una dirección, que deberá poner en orden las finanzas de la organización, más aceptable para el poder<sup>33</sup>.

Su implantación regional había protegido de algún modo a la Liga por la defensa de los derechos de la persona en la región de los Grandes Lagos (LDGL), pero también ella se encontró en el punto de mira del poder en octubre de 2015. Se le aplicó el mismo procedimiento que a Liprodhor. Cuando una nueva dirección, elegida en Goma, RDC, debía entrar en funcionamiento en la sede de Kigali, la policía irrumpió y detuvo a ocho miembros, que más tarde, tras varias horas de interrogatorio, fueron liberados. Se le reprocha además al secretario general de vulnerar la legislación sobre migración y residencia. Después de estos incidentes, la LDGL no ha retomado sus actividades y sus oficinas permanecen cerradas<sup>34</sup>. A pesar de este constante control de la vida asociativa, el gobierno insiste en alabar el dinamismo de este sector. Le *Rwanda Civil Society Development Barometer* de 2015, redactado por la plataforma (gubernamental) de la sociedad civil, señala que la participación ciudadana en la organización de la sociedad civil es de más del 61%<sup>35</sup>.

### 3. GOBERNANZA SOCIO-ECONÓMICA

Si bien la economía ruandesa ha seguido creciendo con una tasa de casi el 7% en 2015, varias debilidades estructurales empiezan a aparecer más patentes: el déficit presupuestario aumenta, los ingresos fiscales permanecen limitados; el sector privado sigue siendo débil; la ayuda internacional

<sup>30</sup> FDU-Inkingi, « Press release. SOS: Mrs. Illuminée Iragena reported to be in critical condition following torture in Kami military camp », Londres, 28 abril 2016.

<sup>31</sup> « Fighting for recognition: political opposition in Rwanda », *DW.com*, 9 septiembre 2015.

<sup>32</sup> « LIPRODHOR elections called off as it gets rowdy », *The New Times*, 6 septiembre 2015.

<sup>33</sup> « LIPRODHOR finally elects new leaders », *The New Times*, 22 noviembre 2015.

<sup>34</sup> « Rwanda: HRD Epimaque Kwokwo unlawfully detained and later arrested », *Frontline Defenders*, 15 octubre 2015. Desde entonces no se percibe ninguna actividad en la sede de la LDGL.

<sup>35</sup> « New survey puts citizen participation and CSO inclusiveness at 61% », *The New Times*, 19 diciembre 2015.

disminuye; la balanza de pagos acumula déficits crecientes. Este último fenómeno ejerce fuertes presiones sobre las reservas de cambio, que han disminuido un 12% en 2015, cubriendo cuatro meses de importaciones. Durante el mismo año, el valor de los activos netos en divisas de los bancos comerciales ha caído un 70%. Frente a los riesgos ligados a las cuentas exteriores, Standar & Poors reconduce las perspectivas de “estables” a “negativas”.

Ruanda figura entre la pequeña decena de países africanos que aparecen en los ficheros de “Panama Papers”. Debden Investments Ltd. estaba gestionado por dos personas próximas al presidente Kagame, el general Emmanuel Ndahiro, su antiguo médico privado y jefe de los servicios de información y Hataro Sekoko, hombre de negocios, citado a menudo como hombre de paja de Kagame. La revelación no fue recogida por la prensa de Kigali y el ministro de Finanzas y de Planificación económica se limitó a un breve y lacónico comunicado publicado el 6 de abril de 2016: “Debden (...) fue creado en 1998<sup>36</sup> por el gobierno de transición de la época como vehículo para un objetivo específico que garantizara servicios estratégicos (...) Estos servicios incluían el alquiler de medios de transporte apropiados para responsables del gobierno<sup>37</sup>. Debden Investments Ltd. era utilizado de manera transparente y no ha implicado interés privado alguno, ni transacción ilegal ni evasión fiscal”. Un tanto extraño comprobar que la sociedad ha sido gestionada por dos particulares y que la estructura no aparezca más que gracias a la publicación de “Panama Papers”, 18 años después de su creación.

Un estudio reciente llevado a cabo en el oeste del país muestra que la imposición de innovaciones agrícolas tiene efectos perversos, que las estadísticas no captan. Sólo una minoría relativamente acomodada de campesinos saca provecho de la modernización, mientras las políticas implantadas han agravado la pérdida de tierras y la desigualdad de la mayoría pobre. Las prácticas de subsistencia han quedado trastocadas, la pobreza aumenta, los sistemas locales de conocimiento, de comercio y de trabajo han quedado perturbados y la seguridad sobre la propiedad de la tierra, así como la autonomía campesina, ha disminuido. Los autores reclaman una evaluación de impacto más rigurosa, basada no solo en indicadores “objetivos”, sino también en observaciones locales y cualitativas<sup>38</sup>.

El estado de los indicadores sociales ha dado lugar a un vivo debate. La cuarta Encuesta integral sobre las condiciones de vida de las familias (EICV4), salió en agosto de 2015<sup>39</sup>. El informe mostraba un sustancial progreso en la reducción de la pobreza, que pasaba del 44,9% en 2010/11 (EICV3) al 39,1% en 2013/14; una disminución espectacular de 6% en solo cuatro años. No obstante, una lectura más atenta muestra que los resultados de la última encuesta no pueden simplemente ser comparados con los de encuestas precedentes. En efecto, se aportaron modificaciones en la metodología de la definición del consumo, de la línea de pobreza y de los umbrales de consumo. Al disminuir artificialmente el valor de la cesta de consumo, el informe reducía la línea de pobreza 19 puntos del porcentaje en 2013/14 comparado a 2010/11. Cuando se volvió a hacer el cálculo sobre la base de la misma línea de pobreza, se situó en el 33% en 2010/11, 12 puntos más abajo que la indicada en el EICV3. La verdadera comparación entre 2010/11 y 2013/14 no está, en consecuencia, entre el 45% y el 39% de tasa de pobreza, sino entre el 33% y el 39%. En otras palabras, más que una disminución de 6 puntos, lo que muestra el EICV4 es un aumento de 6 puntos<sup>40</sup>.

---

<sup>36</sup> Más precisamente el 14 de octubre, justo después de la segunda invasión de la RDC por parte del ejército ruandés. De ahí a suponer que hay un lazo de unión con la explotación ilegal de los recursos naturales, no hay más que un paso.

<sup>37</sup> Esto parece ser una referencia explícita a los dos aviones-bombardero que Kagame utiliza para sus desplazamientos extranjeros, que formalmente son propiedad de Repli Investments, gestionados en la época por Hataro Sekoko y Manasseh Nshuti, otra persona cercana al presidente.

<sup>38</sup> DAWSON, N., MARTIN, A., SIKOR, T., « Green Revolution in Sub-Saharan Africa: Implications of Imposed Innovation for the Wellbeing of Rural Smallholders », *World Development*, Vol. 78, 2016, pp. 204-218.

<sup>39</sup> The Republic of Rwanda, National Institute of Statistics, *Rwanda Poverty Profile Report 2013/14*, Kigali, agosto 2015.

<sup>40</sup> Para un cálculo más detallado, ver REYNTJENS, F., « Reduction of poverty and inequality, the Rwandan way. And the aid community loves it », *Analysis and Policy Brief n° 16*, Anvers, IOB, noviembre 2015 ; ver igualmente « Le Rwanda accusé de manipuler ses chiffres sur la pauvreté », *France24.com*, 2 noviembre 2015.

Evidentemente, esta constatación provocó un clamor de indignación. El Instituto de estadísticas publicó un comunicado que afirmaba que las dudas eran “fundamentalmente falsas”, pero sin explicar por qué<sup>41</sup>. *The New Times*, naturalmente, atacó a quienes criticaban la encuesta; aquí también sin entrar en el debate de fondo<sup>42</sup>. De manera más sorprendente, los donantes de fondos barruntaron la existencia de un problema y dijeron (en privado) que iban a verificar las cifras, pero – en el momento de redactar estas líneas, más de seis meses después del asunto en cuestión – no se ha dado seguimiento (público) alguno al tema. Existe, sin embargo, un problema serio, ya que la comunidad internacional acepta una transacción entre “desarrollo” y represión. Si este “desarrollo” no se fundamenta en hechos, como da la impresión ahora, lo que queda es la represión, para la que los hechos son patentes. Resulta extraño que los donantes no se sientan suficientemente interpelados por fallos considerables en dos terrenos que consideran importantes, la pobreza y la desigualdad, cuando Ruanda en otras ocasiones ha hecho trampas al respecto. En Kinyarwanda existe incluso una palabra para calificar estas prácticas, “tekiniki”, del francés “techniquer” o manipular los datos.

No obstante, es preciso poner de relieve que Ruanda está lejos de ser el único país de África donde uno debe confrontarse a serias incertidumbres con relación a las cifras. Morten Jerven, que desde hace tiempo estudia el problema de las estadísticas defectuosas, ha escrito recientemente que “nuestro conocimiento basado en las cifras está doblemente sesgado: sabemos poco sobre los países pobres y menos aún sobre los pobres que viven en esos países”<sup>43</sup>. Resulta por lo tanto aleatorio basarse únicamente en estadísticas para concluir en una disminución o aumento de la pobreza y de la desigualdad. Esta constatación sugiere que es preciso combinar datos cuantitativos con observaciones cualitativas para comprender mejor cómo funciona la pobreza.

#### 4. JUSTICIA

El proceso más revelador es sin duda el que no ha tenido lugar. A pesar de que Ruanda no forma parte del estatuto de Roma, el presidente Kagame está entre las voces eminentes en un creciente grupo de líderes africanos que quieren abandonar la Corte penal internacional (CPI), al tildarla de “selectiva”, “humillante”, anti-africana” y como una amenaza para su soberanía. Si bien es cierto que la mayoría de los investigados o inculcados en la CPI son africanos, también es verdad que es el caso de las víctimas de los abusos. Desde el punto de vista popular, la CPI es resueltamente pro-africana”.

Parece que Kagame no es que esté opuesto a la justicia internacional sino a la simple justicia independiente. La opositora Victoire Ingabire, en la cárcel tras un proceso inicuo plagado de injerencias del poder ejecutivo, y de Kagame personalmente, apeló a la Corte africana de los derechos del hombre y de los pueblos (CADHP) en octubre de 2014 por varias violaciones de la Carta africana de derechos humanos y de los pueblos. El asunto quedó fijado para el 4 de marzo de 2016. Ya desde febrero se levantaron obstáculos en la preparación del proceso. El abogado ruandés de Ingabire fue registrado a la entrada de la cárcel y los documentos que llevaba fueron leídos por la policía. Luego se le rechazó acceder a su clienta, cuyo régimen de visitas fue reducido drásticamente. Su abogada holandesa no obtuvo el visado y se le impidió por consiguiente preparar el dossier de su clienta. Cuando en mayo llegó a Ruanda con un visado turístico obtenido en Kenia, se le prohibió visitar a su clienta argumentando que su visado no era el apropiado y fue expulsada<sup>44</sup>.

---

<sup>41</sup> « Press statement from the National Institute of Statistics of Rwanda », *The New Times*, 3 noviembre 2015.

<sup>42</sup> « Poverty rose by six per cent? You racists, tell that to the birds », *The New Times*, 4 noviembre 2015; « ‘Lead experts’ on Rwanda and their parallel universe », *The New Times*, 13 noviembre 2015.

<sup>43</sup> JERVEN, M., « Africa by numbers: Reviewing the database approach to studying African economies », *African Affairs*, Vol. 115, n° 459, 2016, p. 356 ; ver igualmente « L’Afrique reste fâchée avec les chiffres », *Le Monde Économie*, 13 mayo 2016.

<sup>44</sup> « Rwanda : l’avocate de l’opposante Victoire Ingabire sommée de quitter le pays », RFI, 22 mayo 2016 ; « Rwanda : les autorités s’expliquent sur l’expulsion de l’avocate d’Ingabire », RFI, 24 mayo 2016.



El 29 de febrero, apenas unos días antes del inicio del proceso previsto en Arusha, Ruanda retiró la declaración hecha en 2013, que permite a los individuos recurrir a los tribunales, en aplicación del artículo 34(6) del protocolo de la CADHP, cuando ya había hecho llegar a la corte una respuesta de 24 páginas al requerimiento de Ingabire. El 4 de marzo, los abogados de Ingabire estaban presentes, pero el Estado ruandés no se presentó, con la clara intención de impedir que la corte abordara el caso. Dado que la denuncia era anterior a la retirada ruandesa, queda por ver si la corte estimará si sí o no resuelve la cuestión.

De cualquier manera, como la CADHP es tan africana como el baobab, manifiestamente, el problema de Ruanda no es el anclaje de la corte en el continente, sino el riesgo de que, efectivamente, pueda dictar sentencia y resolver con plena independencia y sin injerencia del poder ejecutivo, contrariamente a los que sucede en las jurisdicciones ruandesas con asuntos de connotación política. Una censura por parte de la CADHP expresaría la naturaleza política de la condena a Ingabire a una larga pena de cárcel y su eliminación del juego político. Esta saga muestra hasta qué punto el régimen ruandés no confía en la calidad de su propio sistema judicial<sup>45</sup>.

El proceso más visible ante la justicia ruandesa ha sido el del general retirado Frank Rusagara, del coronel Tom Byabagamba y del sargento desmovilizado François Kabayiza ante el tribunal militar. Tal y como lo indicábamos el año pasado, este proceso y los que lo precedieron sugieren que el temor a actos de subversión en el interior del país es en adelante real. Durante el proceso, el fiscal había acusado a los inculcados de haber difundido la propaganda del movimiento de oposición en el exilio, *Rwandan National Congress* (RNC), o de haber afirmado que Ruanda era un Estado policial y una república bananera. Todo ello podía ser cierto, pero no constituía una infracción. El 31 de marzo de 2016, Byabagamba y Rusagara fueron condenados a 21 y 20 años de reclusión respectivamente. Kabayiza cargó con cinco años por retención de pruebas. Según Human Rights Watch, el proceso estuvo manchado por vicios, concretamente por torturas y manipulación de testigos. Además, las condenas lo fueron por hechos no punibles derivados del derecho a la libertad de opinión y expresión<sup>46</sup>.

En otro asunto, en parte ligado al anterior, el capitán retirado David Kabuye, marido de la antigua jefe del protocolo presidencial caída en desgracia desde hace varios años, fue detenido en marzo de 2015 tras haber purgado una pena de cárcel de seis meses por tenencia ilegal de arma de fuego. La fiscalía requirió quince años de cárcel por incitación a la insurrección e infracciones conexas. Los cargos eran unas declaraciones hostiles al poder que Kabuye habría hecho en la cárcel, comparables a las que se reprochaba a Rusagara y Byagamba. En diciembre de 2015, Kabuye fue condenado a cinco meses de cárcel ya que la corte solo retuvo el cargo de difamación en público. Como ya había pasado nueve meses en detención preventiva, fue liberado. En el proceso, Kabuye afirmó haber sido forzado a testificar contra Rusagara y Byabagamba, cuando inicialmente había declarado que eran inocentes.

Otros procesos conciernen a personas sospechosas de implicación en el genocidio, transferidas por el TPIR o extraditadas desde países terceros. Jean Uwinkindi fue condenado a cadena perpetua en diciembre de 2015, Léon Mugesera lo fue en abril de 2016. Con relación a éste último, perseguido por un discurso pronunciado bastante antes del genocidio, no ha sido posible saber sobre qué base legal se fundamenta la condena. El caso Munyagishari se inició a finales de enero de 2016.

Con la sentencia dictada, en apelación, el 14 de diciembre de 2015 sobre el caso llamado "Butare", que concernía a seis acusados, el TPIR puso fin a su actividad, 21 años después de su creación. La sala de apelación confirmó las condenas, pero redujo las penas de cárcel para todos los condenados. Entre ellos figura la antigua ministra Pauline Nyiramasuhuko, la primera mujer condenada por genocidio en una jurisdicción internacional. El balance de los trabajos del TPIR ha sido: 92 personas inculpadas, de las que 61 fueron condenadas y 14 absueltas. Dos inculcados murieron antes o durante su proceso y en otros

<sup>45</sup> Para más detalles, ver REYNTJENS, F., « Rwanda isn't opposed to international justice, it's opposed to independent justice », *African Arguments*, 14 marzo 2016.

<sup>46</sup> HUMAN RIGHTS WATCH, « Rwanda: Ex-Military Officers Convicted Over Comments. Investigate Allegations of Torture, Witness Tampering », Nairobi, 1<sup>er</sup> abril 2016.

dos casos se retiraron las acusaciones. Nueve inculpados están en fuga. El TPIR ha trasladado dos casos a Francia y otros dos a Ruanda, además de seis personas en fuga. Los otros tres, considerados como “peces gordos”, han sido transferidos al Mecanismo de las Naciones Unidas para los tribunales penales internacionales (MTPI), una estructura que debe cubrir las funciones residuales del TPIR.

Si bien el TPIR ha desempeñado una función importante en el establecimiento de la verdad sobre la organización del genocidio, ha hecho justicia y ha contribuido al desarrollo del derecho penal internacional, su balance es mitigado. Ruanda ha criticado la ausencia de reparación para con las víctimas, el hecho de que la sede del tribunal haya estado en Arusha y no en Ruanda, así como la absolución de cierto número de imputados. Otros han criticado el número relativamente reducido de sospechosos juzgados, la contestable calidad del trabajo de la fiscalía, los elevados costes (en torno a 24 millones de dólares de media por inculpados) y la excesiva duración del proceso. Sin embargo, su indeleble tara residirá en que ha practicado una justicia de los vencedores, a causa de su incapacidad o falta de voluntad en perseguir los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad cometidos en 1994 por el FPR; crímenes sobre los que, sin embargo, el tribunal era claramente competente según el mandato recibido<sup>47</sup>.

Los temas judiciales tratados en países terceros concernían esencialmente a dos tipos de asuntos: persecución por genocidio en virtud de la competencia universal y solicitudes de extradición de sospechosos por parte de Ruanda. Con relación al primer tipo, Claver Berinkindi fue condenado a cadena perpetua por un tribunal de Estocolmo en mayo de 2016, mientras se iniciaba este mismo mes ante la Audiencia de París el proceso contra dos inculpados. Se trata del segundo proceso, tras la condena de Pascal Simbikangwa hace dos años, en Francia, país donde el dossier ruandés está cargado de emociones y de polarización<sup>48</sup>. Por el contrario, el caso del sacerdote Wenceslas Munyeshyaka, cuyo dossier había sido transferido por el TPIR, fue sobreseído en octubre de 2015. En un contexto diferente, ya que no se trata del genocidio de 1994 sino de crímenes cometidos en el este de la RDC, dos líderes de las FDLR fueron condenados a 8 y 13 años de cárcel en Stuttgart (Alemania) en septiembre de 2015.

Respecto al segundo tipo de asuntos, extradiciones o deportaciones fueron rechazadas o suspendidas en Francia en septiembre de 2015, en Canadá y en los EEUU en noviembre de 2015 y en los Países Bajos y en Reino Unido en diciembre de 2015. Sin embargo, el caso más espectacular de extradición fue el del director general de la *National Intelligence and Security Services*, el general Karenzi Karake, de visita en el Reino Unido.

Karenzi Karake fue detenido en Londres en 22 de junio de 2015 sobre la base de una solicitud de extradición de España, donde es perseguido desde 2008 con otros 39 oficiales ruandeses por genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, terrorismo y asesinato de ciudadanos españoles. La detención fue vivamente protestada por Ruanda y por algunos medios políticos británicos y agudizó las tensas relaciones entre Ruanda y el Reino Unido ya en dificultad desde la difusión por parte de la BBC del documental *Rwanda. The Untold Story* en octubre de 2014. El 25 de junio, Karenzi Karake fue liberado tras abonar una fianza de un millón de libras, pero no podía abandonar el Reino Unido a la espera de una decisión definitiva sobre la petición de extradición. El hecho de que Cherie Booth, esposa de Tony Blair muy cercano a Kagame, dirigía el equipo de defensa de Karenzi añadió un poco más de pimienta política al asunto.

Ruanda movilizó inmediatamente a África, donde desde hace tiempo ciertos dirigentes combaten la competencia universal. El 26 de junio, el Consejo de paz y seguridad de la Unión africana condenó la detención de Karenzi Karake, exigió su liberación inmediata y consideró el incidente como “una clara violación de la soberanía e integridad territorial de los Estados africanos”<sup>49</sup>. En Ruanda, manifestaciones convocadas por el gobierno, reunieron a miles de personas, no sin haber sido objeto de presiones, que desfilaron en las calles de Kigali. Por su parte, la oposición en exilio y las familias de las víctimas de

<sup>47</sup> HUMAN RIGHTS WATCH, « Rwanda: International Tribunal Closing Its Doors », Nairobi, 23 diciembre 2015.

<sup>48</sup> Es de nuevo el caso en este proceso, en el que se juzga no dos hombres sino dos sistemas o políticas; ver « Parler du Rwanda en France: des passions intactes aux assises », AFP, 20 mayo 2016.

<sup>49</sup> « Africa rallies behind Rwanda in Gen Karake case », *The New Times*, 28 junio 2015.

crímenes del FPR saludaron la detención y animaron a España a que persiguiera y juzgara a Kerenzi Karake.<sup>50</sup> Supuso también la ocasión para recordar los abusos cometidos por Karenzi Karake y más en general por el aparato de seguridad del FPR<sup>51</sup>.

El 10 de agosto el asunto quedó en agua de borrajas. Ya en febrero, la Audiencia nacional española había levantado los mandatos de arresto contra un cierto número de sospechosos (entre ellos Karenzi Karake) en virtud de una ley de 2014 que había reducido el alcance de la competencia universal. Dado que la base de la solicitud española de extradición había desaparecido, la Westminster *magistrates' court* la rechazó y Karenzi Karake regresó a Ruanda, donde fue recibido como un héroe. Respecto del futuro, según la jurisdicción española, los sospechosos no podrán ser perseguidos judicialmente más que si son detenidos en España. Se cierra de este modo otra puerta más de lucha contra la impunidad.

## 5. DERECHOS HUMANOS

El Departamento de Estado americano resume así su evaluación de la situación de los derechos humanos en Ruanda: "Intimidación, detención, abuso contra opositores políticos, militantes de derechos humanos e individuos percibidos como amenazas para el control gubernamental y su orden social; falta de respeto de las fuerzas de seguridad para con el Estado de derecho; restricciones de las libertades. A causa de las limitaciones para el registro y funcionamiento de los partidos opositores, los ciudadanos no tiene la posibilidad de cambiar su gobierno por medio de elecciones libres y equitativas". El informe precisa luego numerosas violaciones, entre otras, ejecuciones arbitrarias e ilegales, arrestos arbitrarios, atentados a las libertades de expresión, de prensa, de reunión y asociación, e intimidación de ONG nacionales e internacionales, sobre todo las que siguen la situación de los derechos humanos<sup>52</sup>. Los informes anuales de organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch realizan constataciones similares<sup>53</sup>.

Frente a una situación que no mejora, los socios de Ruanda expresan sus inquietudes de manera cada vez más insistente. A finales de mayo de 2015, el vice-secretario de Estado asistente americano (*Deputy Assistant Secretary*) se quejó de violaciones en numerosos terrenos y manifestó su preocupación por el hecho de que "las performances de Ruanda en materia de derechos humanos crean un peligroso precedente para la región y para el continente". Observó un "deterioro" de la situación y afirmó que "los EEUU seguirán insistiendo para que Ruanda respete los derechos de todos sus ciudadanos"<sup>54</sup>. Con ocasión de la jornada de los derechos humanos, el 10 de diciembre de 2015, seis embajadores en Ruanda de países de la UE, expresaron su "preocupación" y animaron a Kigali a que mejorara la situación con relación a los medios de comunicación y con las libertades públicas. Afirmaron tener "permanentes inquietudes sobre los temas de las libertades de expresión, de prensa y desarrollo de la sociedad civil, libertad de asociación y otros sectores ligados a los derechos políticos"<sup>55</sup>. La reacción del gobierno ruandés era previsible. El ministro de Justicia Johnston Busingye dijo estar ya cansado de este tipo de "declaraciones imprecisas que con completamente falsas"<sup>56</sup>.

Abordamos ahora algunos asuntos en los que se han manifestado problemas particulares. El régimen ha seguido amenazando y, si era preciso, eliminando a los que, en el interior o exterior, ha considerado

---

<sup>50</sup> Ver por ejemplo « Lt General Karake arrest in London: Message families of the Spanish nationals killed in Rwanda », *Rwandansrights.org*, 28 junio 2015.

<sup>51</sup> REVER, J., « What the United Nations Knows about Rwanda's Powerful Spy Chief », *Foreign Policy Journal*, 3 julio 2015; SMITH, S., « War Crimes and Rwandan Realities », *The New York Times*, 19 julio 2015.

<sup>52</sup> United States Department of State, *Country Reports on Human Rights Practices for 2015*, Rwanda.

<sup>53</sup> Ver igualmente, más allá del informe anual el documento detallado de Human Rights Watch, *Contribution au 4ème examen, op. cit.*

<sup>54</sup> «Testimony. Steven Feldstein, Deputy Assistant Secretary, Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor. House Foreign Affairs Committee, Subcommittee on Africa, Global Health, Global Human Rights, and International Organization », Washington DC, 20 mayo 2015.

<sup>55</sup> « European nationals say concerned by Rwanda's human rights record », Kigali, Reuters, 11 diciembre 2015.

<sup>56</sup> *Idem*. Ver igualmente « Busingye rejects claims Rwanda stifles freedom of expression », *The New Times*, 12 diciembre 2015.

opositores; algo sobre lo que incluso un comité del Congreso americano se ha detenido en mayo de 2015<sup>57</sup>. Lo mismo que le sucedió a Émile Gafarita, que debía prestar testimonio a cargo del FPR sobre el atentado del 6 de abril de 1994 (ver crónica en el Anuario anterior), el antiguo investigador de un equipo de defensa en el TPIR Jean Chrisostome Ntirugiribambe fue secuestrado en Nairobi en 23 de junio de 2015; desde entonces no se tiene rastro alguno de él. Según fuentes contactadas por *Digital Journal*, el agregado militar de Ruanda en Nairobi estaría implicado en esta “desaparición”, siguiendo instrucciones del general Jack Nziza, ya sospechoso de hechos similares en el pasado<sup>58</sup>. En agosto de 2015, un informe de la Agencia de los servicios fronterizos de Canadá describió “una práctica bien documentada de represión de personas críticas del gobierno ruandés tanto en el interior como en el exterior de Ruanda”; práctica que incluía amenazas, ataques y asesinatos<sup>59</sup>.

En septiembre de 2015, el hijo del hombre de negocios Assinapol Rwigara describió detalladamente cómo su padre había sido asesinado en febrero (cf. nuestra crónica en el Anuario anterior) por haber rechazado vender un hotel en la ciudad de Kigali<sup>60</sup>. Un mes más tarde, emergieron precisiones sobre la manera como el antiguo médico privado de Kagame, el Doctor Emmanuel Gasakure había sido asesinado por los servicios secretos; se habría opuesto a la revisión constitucional que permitía a Kagame optar a nuevos mandatos<sup>61</sup>. Un mes más tarde, el antiguo oficial Robert Higiuro fue amenazado de muerte por haber desvelado tentativas de asesinato de opositores en el extranjero. EEUU afirmó haber elevado este fenómeno en todos los niveles, llegando incluso al presidente Kagame, y que “ello tendrá un profundo impacto en nuestras futuras relaciones con los ruandeses”<sup>62</sup>.

Un libro publicado a principios de 2016 por Anjan Sundaran muestra de manera penetrante el lastimoso estado de la libertad de prensa<sup>63</sup>. Llegado a Kigali en 2012 para formar periodistas en el marco de un programa internacional, este autor quedó confrontado a un sutil y brutal terror. Uno tras otro, los participantes en el curso se sintieron víctimas del clima de miedo creado por la manera radical como el régimen se las gastaba con las voces críticas o incluso independientes. Algunos desaparecieron, otros huyeron del país, otros abandonaron la profesión o se dedicaron a dar incienso al régimen. El libro ofrece una visión única desde dentro y muestra de manera concreta el funcionamiento del terror en el día a día. La reacción fue la de siempre: un periódico cercano al régimen publicó inmediatamente un “testimonio” de un antiguo participante en el curso de Sundaran que calificó a éste de manipulador y trató de ensuciarlo, lo mismo a los otros participantes víctimas de la represión<sup>64</sup>.

El servicio kinyarwanda de la BBC World Service, ya suspendido como consecuencia de la difusión del reportaje “Rwanda. The Untold Story” en octubre de 2014, fue definitivamente prohibido a finales de mayo de 2015. El periodista Fred Muvunyi, que como presidente de la Comisión ruandesa de medios (RMC) había criticado sobre bases jurídicas esta decisión, dimitió y huyó del país<sup>65</sup>. Ello fue concretamente consecuencia, igualmente en mayo, del impedimento por parte de *Rwanda Governance Board* de la publicación del informe de la RMC sobre el estado de los medios de comunicación en Ruanda<sup>66</sup>. Se comprende mejor el asunto cuando el informe salió finalmente a primeros de 2016: insípido

---

<sup>57</sup> « U.S. lawmaker seeks probe into alleged Rwandan government plots to kill dissidents », *The Globe and Mail*, 20 mayo 2015.

<sup>58</sup> « Another Rwandan is kidnapped in Africa: Kagame agents suspected », *Digital Journal*, 10 julio 2015.

<sup>59</sup> «Rwandan intelligence agents harassing opponents in Canada, border service says», *National Post*, 13 agosto 2015.

<sup>60</sup> « Aristide Rwigara (USA): ‘My father assassinated because he did not allow the state to enter into his business’ », *The Rwandan*, 15 septiembre 2015.

<sup>61</sup> « Il en savait trop : pourquoi et comment Paul Kagame a fait assassiner son médecin personnel », *La Tribune franco-rwandaise*, 23 octubre 2015.

<sup>62</sup> «Rwandan officer who leaked assassination-list evidence becomes a target», *The Globe and Mail*, 19 noviembre 2015.

<sup>63</sup> SUNDARAM, A., *Bad News. Last Journalists in a Dictatorship*, New York, Doubleday, 2016.

<sup>64</sup> « Fabrications and distortions », *The Rwanda Focus*, 12 enero 2016.

<sup>65</sup> COMMITTEE TO PROTECT JOURNALISTS, « Hopes of independent press in Rwanda fade as head of media body flees », 8 julio 2015.

<sup>66</sup> REPORTERS SANS FRONTIERES, « Suspension indéfinie de la BBC, l’arbre qui cache la forêt », 2 junio 2015.

y mal escrito, evita cualquier crítica incluso moderada<sup>67</sup>. Señalemos por fin que el sitio Ireme fue bloqueado a primeros de diciembre de 2015, que todos los ejemplares del periódico Mont Jari fueron embargados días más tarde y que las oficinas de Kigali del semanario keniano *The East African*, que acababa de publicar una investigación sobre un asunto de evasión fiscal, fueron pesquisadas a principios de febrero de 2016. El periodista y bloguero independiente Bob Mugabe, muy activo en las redes sociales, parece hoy la única voz que se atreve a expresar sus opiniones críticas.

En septiembre de 2015, Human Rights Watch publicó un informe detallado sobre el “centro de tránsito” de Gikondo en Kigali, conocido más comúnmente como *Kwa Kabuga*. Desde hace una decena de años, miles de niños de la calle, vendedores ambulantes, trabajadores del sexo, gentes sin techo, pequeños delincuentes y otros grupos vulnerables están detenidos sin base legal en malas condiciones y sometidos a tratos inhumanos y degradantes. Mientras el gobierno presenta ese lugar como un centro de rehabilitación, los cuidados sanitarios son esporádicos y no existe actividad alguna rehabilitadora. Las posibilidades para visitar el lugar son escasas y la asistencia jurídica es inexistente<sup>68</sup>. La reacción del gobierno no se hizo esperar. El ministro de Justicia negó todo y afirmó que HRW “ha escogido una vez más engañar a la gente con declaraciones falsas”. Y dijo en tono amenazante que la organización “rechaza utilizar los mecanismos previstos en el memorándum de acuerdo (*Memorandum of Understanding*) y prefiere la difusión de mentiras y especulaciones”. El gobierno, recordando la manera como había gestionado en 2010-2011 un problema similar de detenciones en la isla Iwawa, escenificó una visita a Gikondo. En el lugar apenas había guardias; estaba limpio, equipado con una cocina moderna; los “dormitorios” se parecían a los de los internados escolares. Los habitantes se divertían, comían bien, estaban bien cuidados y tratados. Los que fueron entrevistados afirmaron que el centro había transformado sus vidas<sup>69</sup>. En una palabra, una especie de paraíso, mil leguas alejado del infierno descrito por Human Rights Watch.

## 6. RUANDA Y LA REGIÓN

La evolución geopolítica más amenazadora en la región de los grandes lagos africanos es incontestablemente el grave deterioro de las relaciones ruando-burundesas. Esta evolución tiene como telón de fondo la crisis política en Burundi desencadenada por la candidatura a un tercer mandato del presidente Nkurunziza<sup>70</sup>, pero ya era visible antes.

Los intercambios entre los dos países son agresivos y hostiles; recuerdan la “guerra fría” entre Kigali y Bujumbura de comienzos de los años 1970. Así, por ejemplo, según el presidente Kagame, los dirigentes burundeses “masacran a su población mañana y tarde”<sup>71</sup>. Ruanda acusa a Burundi de albergar elementos de las FDLR; Burundi replica afirmando que Ruanda ayuda a los que cometen atentados en Burundi y que incluso Kigali ayuda a rebeldes burundeses<sup>72</sup>. Ruanda, enarbolando el espectro del genocidio, incluso parece preparar el terreno para una intervención militar en Burundi. El hecho de que numerosos políticos de la oposición, militares, periodistas y líderes de la sociedad civil hayan elegido Kigali como domicilio no arregla las cosas. Ruandeses, acusados de espionaje, son detenidos en Burundi<sup>73</sup>; el 7 de octubre de 2015, el primer consejero de la embajada de Ruanda fue expulsado por el motivo de que apoya a grupos que desestabilizan el país. En mayo de 2016, Ruanda comenzó a expulsar

<sup>67</sup> RWANDA MEDIA COMMISSION, *Report on broadcasting media content monitoring*, Kigali, enero 2016.

<sup>68</sup> HUMAN RIGHTS WATCH, « *Why Not Call This Place a Prison? » Unlawful Detention and Ill-Treatment in Rwanda's Gikondo Transit Center*, 24 septiembre 2015.

<sup>69</sup> « How Gikondo Transit Centre is transforming lives », *The New Times*, 4 octubre 2015

<sup>70</sup> Ver sobre esta cuestión la crónica política de Burundi escrita por Stef Vandeginste en este Anuario.

<sup>71</sup> « Bujumbura proteste vivement face aux propos du Président rwandais », Kigali, ARI, 9 novembre 2015 ; « Nous préférons garder de la hauteur », *Iwacu*, 9 noviembre 2015.

<sup>72</sup> La posición burundesa queda resumida en un documento publicado en mayo de 2016 por la oficina encargada de la comunicación de la presidencia: *Memorandum. Actes d'agression du Rwanda contre le Burundi*, s.l., s.d.

<sup>73</sup> El caso más emblemático es el del antiguo embajador y ministro Jacques Bihozagara, detenido en diciembre de 2015 y fallecido en una cárcel burundesa a finales de marzo de 2016.

a miles de burundeses, instalados en su mayoría desde hacía tiempo en Ruanda. No se trata de refugiados, que son bien acogidos, sino de personas “en situación irregular”.

El apoyo de Ruanda a un movimiento rebelde burundés en gestación se precisó rápidamente. A primeros de noviembre de 2015, France24 habló con testigos en el campo de refugiados burundeses de Mahama en Ruanda, los cuales evocaron reclutamientos para unirse a la rebelión<sup>74</sup>. Jeff Drumtra, que trabajó durante cinco meses en este campo, confirmó el hecho<sup>75</sup>, que posteriormente precisó en una larga entrevista<sup>76</sup>. Una investigación conducida por Refugees International mostró con detalle cómo Ruanda apoyaba el reclutamiento, entrenamiento y armamento de refugiados burundeses<sup>77</sup>. En enero de 2016, estas informaciones fueron confirmadas por el grupo de expertos de las Naciones Unidas sobre la RDC. “Combatientes” burundeses fueron reclutados en el campo de Mahama y entrenados durante dos meses en un bosque por instructores de los que formaban parte militares ruandeses. Camiones militares, a menudo escoltados por militares ruandeses, aseguraron su transporte<sup>78</sup>. En febrero HRW confirmó los datos del grupo de expertos<sup>79</sup>. Estas actividades habrían continuado en 2016<sup>80</sup>.

Este asunto recuerda el del apoyo ruandés al M23 en 2012-2013. Lo mismo que entonces, Ruanda negó ásperamente las acusaciones contra las evidencias y afirmó que se le convertía en cabeza de turco de la crisis burundesa, a la vez que de paso desacreditaba el trabajo del grupo de expertos<sup>81</sup>. Ya nadie cree en los desmentidos y los americanos son especialmente claros al respecto. Según su enviado para la región, “hay informes creíbles sobre el reclutamiento de refugiados burundeses en los campos en Ruanda”; la secretaria de Estado adjunta para asuntos africanos afirmó que los informes “sugieren que el gobierno ruandés ha estado implicado en actividades de desestabilización en Burundi”<sup>82</sup>. Sus acciones desestabilizadoras no solo colocan en falso a Ruanda ante sus antiguos aliados, sino también ante los países limítrofes. Desde que el FPR está en el poder Ruanda ha ido chocando, en uno u otro momento, con sus cuatro vecinos, cuando en el pasado, en general, las relaciones habían sido de buen vecindario.

## 7. CONCLUSIÓN

En realidad, al margen de la revisión constitucional que a nadie ha sorprendido, el año estudiado se ha inscrito en la continuidad, caracterizada por un buen gobierno burocrático (si bien aparecen cada vez más debilidades) y por una gobernanza política profundamente viciada. La cuestión está en saber cuánto tiempo pueden coexistir estas dos cosas. *The Economist* señala el dilema de los donantes: “el de seguir dando dinero a un gobierno autoritario con poco respeto a los derechos humanos y con solo un barniz de democracia”<sup>83</sup>. Ruanda no es más que un país africano, entre otros, en los que las relaciones entre ayuda internacional y autoritarismo plantean un problema. Si bien los donantes bilaterales y multilaterales pretenden constantemente promover la democracia, el buen gobierno y los derechos humanos, a menudo son cómplices de un apoyo al desarrollo sin democracia<sup>84</sup>. Se observa cierta “fatiga democrática” en África y una rehabilitación de la gobernanza autoritaria. Como un eco de la teoría de la modernización de

<sup>74</sup> « Le camp de Mahama, centre de recrutement de rebelles selon le Burundi », *France24*, 4 noviembre 2015.

<sup>75</sup> « Burundi's dangerous neighbor », *The Washington Post*, 18 novembre 2015.

<sup>76</sup> « Rwanda conscripts Burundian refugees into new rebel force: an interview with Jeff Drumtra », *SFBayView*, 27 noviembre 2015.

<sup>77</sup> REFUGEES INTERNATIONAL, *Asylum Betrayed: Recruitment of Burundian Refugees in Rwanda*, 14 diciembre 2015

<sup>78</sup> UNITED NATIONS, Security Council Committee established pursuant to Resolution 1533 (2004) concerning the Democratic Republic of the Congo, *Letter dated 15 January 2016 from the Coordinator of the Group of Experts on the DRC addressed to the Chair of the Committee, S/AC.43/2016/COMM.2*, 15 enero 2016, pp. 3-4.

<sup>79</sup> HUMAN RIGHTS WATCH, *Burundi: Abductions, Killings Spread Fear. UN Security Council Should Press for Deployment of International Police Presence*, Nairobi, 25 febrero 2016.

<sup>80</sup> « Exclusive: Rwanda aids Burundi rebels, North Korea arms Congo—U.N. experts », Reuters, 12 mayo 2016.

<sup>81</sup> Ver, por ejemplo « Exclusive: Burundi rebels say trained by Rwandan military – U.N. experts », Reuters, 3 febrero 2016; « Rwanda's interest is a stable and secure Burundi – Mushikiwabo », *The New Times*, 6 febrero 2016.

<sup>82</sup> « US accuses Rwanda of stoking violence in Burundi », AFP, 11 febrero 2016.

<sup>83</sup> « Rwanda: A hilly dilemma. Should Paul Kagame be backed for providing stability and prosperity or condemned for stifling democracy? », *The Economist*, 12 marzo 2016.

<sup>84</sup> Ver sobre esta cuestión HAGMANN, T., REYNTJENS, F. (eds.), *Aid and Authoritarianism in Africa. Development without Democracy*, Londres, Zed Books, 2016.

antaoño, el Estado “desarrollista” parece prescindir de la democracia. Esta evolución sin embargo no se basa más que en la experiencia de unos cuantos países, entre ellos Ruanda y Etiopía, e ignora los progresos realizados por otros que han sabido construir democracias, ciertamente imperfectas, como en Botswana, Ghana y Zambia e incluso Nigeria, al mismo tiempo que realizaban progresos económicos<sup>85</sup>.

Amberes, mayo 2016

*Filip Reyntjens*

[Traducción: Ramón Arozarena]

\* Este texto forma parte de la obra “L’Afrique des Grands Lacs. Annuaire de 2015-2016» (Ed. L’Harmattan), cuya edición coordina Filip Reyntjens, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad de Amberes, autor de esta crónica.



<http://www.africafundacion.org/>

**C/. Gaztambide, 31**

**28015 Madrid**

**Tlf.: 915 497 787**

---

<sup>85</sup> VAN DE WALLE, N., « Conclusion: democracy fatigue and the ghost of modernization theory », in HAGMANN, T., REYNTJENS, F. (eds.), *Aid and Auhoritarianism...*, op. cit., pp. 161-178.